

SESIONES ORDINARIAS

2019

ORDEN DEL DÍA N° 1449

Impreso el día 19 de noviembre de 2019

Término del artículo 113: 28 de noviembre de 2019

COMISIONES DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA Y DE LEGISLACIÓN GENERAL

SUMARIO: **Prevención** y erradicación de la violencia política contra las mujeres. (11-S.-2019.)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Legislación General han considerado el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, sobre sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres, modificaciones a la ley 26.485; y teniendo a la vista los proyectos de ley 591-D.-2018, 2.805-D.-18, 2.806-D.-18, 4.249-D.-18 y 4.591-D.-18, de las señoras diputadas Estévez, Rista, Martínez (S. A.), Siley, Rach Quiroga y otros señores diputados; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan su sanción.

Sala de las comisiones, 17 de septiembre de 2019.

Silvia A. Martínez. – Daniel A. Lipovetzky. – Analía A. Rach Quiroga. – Javier David. – Verónica E. Mercado. – Juan Cabandié. – Ana C. Carrizo. – Carla B. Pitiot. – Olga M. Rista.* – Eduardo P. Amadeo. – Karina V. Banfi. – María G. Burgos. – Guillermo R. Carmona. – Gabriela B. Estévez. – Alicia Fregonese. – Silvia G. Lospennato. – Mónica Macha. – Martín Maquieyra. – Josefina Mendoza. – María C. Moisés.* – Osmar A. Monaldi. – Rosa R. Muñoz. – Claudia Najul. – Mónica Schlotthauer. – Cornelia Schmidt Liermann. – Vanesa Siley. – Alicia Terada.*

Buenos Aires, 16 de abril de 2019.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – El objeto de la presente ley es visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres.

Art. 2° – Modifíquese el artículo 4° de la ley 26.485, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 4°: *Definición.* Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Art. 3° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando al artículo 5° el siguiente inciso:

6. Política: la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.

Art. 4° – Modifíquese la ley 26.485, incorporando al artículo 6° el siguiente inciso:

h) Violencia pública-política contra las mujeres: aquella que, fundada en razones

* Integran dos (2) comisiones.

de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros.

Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

GABRIELA MICHETTI.

Juan P. Tunessi.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Legislación General han considerado el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, sobre sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres, modificaciones a la ley 26.485, teniendo a la vista los proyectos de ley 591-D.-18, 2.805-D.-18, 2.806-D.-18, 4.249-D.-18 y 4.591-D.-18, de las señoras diputadas Estévez, Rista, Martínez (S. A.), Siley, Rach Quiroga y otros señores diputados.

El objeto del presente proyecto de ley es visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres.

En 2018 la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia ha considerado los proyectos de la diputada Martínez, de la diputada Siley, de la diputada Rach Quiroga, de la diputada Estévez y de la diputada Rista, que pretendían la modificación de la ley 26.485 para incorporar la violencia política a los tipos y modalidades que dicha norma sanciona. El logro de este productivo trabajo fue un dictamen que proponía sancionar y erradicar la violencia política hacia las mujeres de nuestra vida democrática.

Este trabajo constituyó un antecedente valioso a la hora de analizar el expediente venido en revisión del Honorable Senado de la Nación (11-S.-2019), que pretende los mismos objetivos.

Por eso sin mayor dilación la comisión ha decidido avalar la sanción del Senado y dar urgente curso a su propuesta a fin de poder contar con una herramienta eficiente para poder visibilizar, sancionar y erradicar la violencia sexista hacia las mujeres políticas.

Como antecedentes recordamos que la Argentina fue la pionera a la hora de proteger los derechos políticos de las mujeres incorporando el cupo del 30 % para

los cargos legislativos. Sin embargo, esto que fue una oportunidad única se convirtió en nuestro techo de participación. Las violaciones a la ley de cupo fueron una constante durante todos los años de su vigencia.

Si bien la insistencia y perseverancia de importantes mujeres políticas, como la doctora María Teresa Merciadri de Morini, lograron la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos provocando la sanción del decreto 1.246/2000, que fortalecía la implementación de las cuotas o cupos, las resistencias y violaciones a la ley de cupo no cesaron.

El incumplimiento manifiesto de las normas, las negociaciones solapadas, las presiones y el acoso para despojar a las mujeres de sus puestos y posteriormente de sus bancas fueron y son las realidades a las que debemos enfrentarnos en cada elección.

Durante la elección general de 2015, en al menos 4 provincias (Misiones, Santa Fe, Buenos Aires y Salta) hubo listas que incumplieron con alguno de los requisitos establecidos en la ley de cupo: presencia de mujeres, alternancia, suplencias (ELA, 2015).

La Ley de Paridad Política en la Argentina se encontraba rezagada respecto de otros países de la región (Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México, entre otros) y europeos (Francia y España), que han introducido una regla de equidad en la representación legislativa (paridad). Incluso algunas provincias argentinas adoptaron el criterio de la igualdad política antes que sancionáramos la ley nacional: Córdoba (2000), Santiago del Estero (2000) y Río Negro (2002).

Las y los integrantes de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia estamos convencidos de que la sanción de la Ley de Paridad de Género constituyó un paso crucial a la hora de lograr la igualdad política entre hombres y mujeres y de esta manera fortalecer nuestra democracia. Cuando las condiciones para el acceso no son equitativas, explica CIPPEC, deben introducirse políticas que mitiguen esa distorsión porque están en juego tanto el derecho a ser elegido como el derecho de los distintos grupos a estar representados en el gobierno.

Los derechos igualitarios de la participación política son constitucionales y están ratificados en tratados y pactos internacionales a los que adhiere la República Argentina y es nuestro deber velar por su cumplimiento. Así lo hacen la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 23), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (art. 25) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 7).

Lograda la democracia paritaria es hora de generar mecanismos efectivos para visibilizar y erradicar el incumplimiento de las normas que regulan la igualdad de oportunidades políticas y proteger los logros que se han alcanzado sin devaluarlos ni violarlos con formas comprendidas por la violencia de género y el acoso personal, político y comunitario al que se ven expuestas las militantes políticas y sindicales.

Es por eso que, siguiendo las recomendaciones de la OEA a través del Mesecvi, Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, resolvimos legislar para no solo proteger a la mujer de la violencia en el ámbito privado, laboral e institucional, sino también en el lugar donde decidimos nuestra vida civil y nuestra posición política. El Mesecvi ha estudiado los avances de las leyes de cupo y paridad en la región y también los fenómenos de violencia que se generan contra las mujeres políticas a la hora de acceder a las normas democráticas.

Las expertas de estos organismos internacionales de defensa y protección de los derechos de las mujeres consideran que las leyes de cuotas o de democracia paritaria han intensificado las reacciones discriminatorias y violentas contra las mujeres políticas. Actos

como impedir el voto, el uso de la violencia sexual contra candidatas mujeres, la destrucción de material electoral, las presiones para las renunciaciones a sus cargos, los juicios continuos contra las mujeres en los medios de comunicación, basados en prejuicios y estereotipos constituyen algunos –solo algunos– de los actos de violencia a los que se ven sometidas las activistas por el solo hecho de participar en política.

Prevenir, sancionar y erradicar estas manifestaciones que socavan la igualdad democrática mejorará la participación de las mujeres en la política y definitivamente mejorará la política y la democracia.

Por todo lo expuesto, las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Legislación General aconsejan su sanción.

Silvia A. Martínez.